

MINUTA LEGISLATIVA

En noviembre de 2019 y tras el denominado estallido social, tuvo lugar un acuerdo político transversal, el cual estableció las bases para la realización de un Plebiscito Nacional, en donde la ciudadanía optaría por la elaboración o no, de una nueva Constitución Política de la República.

Dicho plebiscito, que en primera instancia estuvo contemplado a desarrollarse en abril del año 2020, tuvo que ser postergado para el 25 de octubre del mismo año, en razón de la pandemia. Así, además de la postergación del plebiscito constituyente, mediante la ley Nº 21.221, se procedió a su vez a cambiar la fecha e las elecciones de los Gobernadores Regionales, los Alcaldes y Concejales, para el próximo 11 de abril.

De esta forma, todo el calendario electoral tuvo que sufrir adecuaciones, a fin de mantener los correctos equilibrios y resguardar los procesos electorarios, permitiendo disponer de los adecuados plazos para realizar las respectivas campañas de propaganda política.

Del mismo modo, en virtud del escenario de pandemia que afecta a Chile y el mundo, es que se tramitó la ley Nº 21.257, la cual entrega atribuciones al Servicio Electoral (SERVEL), para disponer de normas e instrucciones necesarias para resguardar el correcto desarrollo del proceso electoral del pasado 25 de Octubre: Dentro de estas medidas se destacó el hecho de poder brindar protección a la salud de aquellos ciudadanos que concurrieron a votar, generando cierta flexibilidad al proceso electoral, ampliando la cantidad de mesas y recintos de votación; así como también el hecho de establecer horarios protegidos y la extensión horaria del mismo proceso.

En consecuencia, y tras el triunfo de la opción apruebo en el mes de octubre, la ciudadanía está llamada nuevamente a concurrir a las urnas el próximo 11 de abril, para elegir a los representantes que compondrán la Convención Constituyente, a los Gobernadores Regionales, Concejales y Alcaldes de cada una de sus respectivas comunas.

En tal sentido, y teniendo presente el contexto de pandemia que estamos enfrentando, es que el Ejecutivo ha tomado la iniciativa de presentar ante este

Senado (Boletín Nº 14.064-07), el proyecto de reforma constitucional que busca ampliar a dos días el plazo para celebrar las próximas elecciones previamente señaladas, modificando el artículo 130 de la Constitución Política de la República.

Así, y si bien el proceso de vacunación hasta ahora ha resultado exitoso, posicionando a nuestro país dentro de las naciones más avanzadas en inoculación de su población, no podemos confiarnos y se deben adoptar medidas que eviten las grandes aglomeraciones de personas, a fin de evitar eventuales contagios.

De esta forma, el Gobierno busca a través de esta reforma constitucional, que las elecciones municipales, de Gobernadores Regionales y de Convencionales Constituyentes, se realicen los días sábado 10 y domingo 11 de abril del presente año, y no en sólo un día como inicialmente estaba previsto.

Esta medida busca resguardar la salud de todos quienes concurran ese día a sufragar, teniendo en consideración el alto flujo de personas que se proyecta asistan al proceso electoral, y el respectivo tiempo que cada una tomará, puesto que se trata de cuatro papeletas: Una para cada cargo a elegir.

Del mismo modo, el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno, busca que el SERVEL pueda establecer horarios exclusivos de votación para diferentes grupos de personas, como por ejemplo adultos mayores, personas embarazadas y enfermos crónicos; con el objetivo de proteger la salud, facilitar el proceso y garantizar la participación de estos grupos de riesgo.

MINUTA LEGISLATIVA

La Universidades, son centros de instituciones de educación superior que tienen por objeto la formación especializada de nuevas generaciones de profesionales. Además de su rol académicos, estas desempeñan funciones claves dentro de la sociedad, en lo que respecta a los ámbitos de las culturas, las artes, la investigación y el fomento del saber en un ambiente de diversidad.

Por la naturaleza propia de las mismas, es que estas instituciones son espacios privilegiados de intercambio de ideas y fomento a la tolerancia y el respeto hacia el pensamiento de los demás. Esto último, dista completamente de hechos de violencia y/o discriminación arbitraria que pudiese generarse o llevarse a cabo dentro de estos espacios.

No obstante lo anterior, es que durante los últimos años se han registrado actos de violencia e intimidación, fundados principalmente en justificaciones de carácter raciales, étnicas, religiosas, de género y políticas; en las cuales no sólo se ha carecido de capacidad para prevenirlas, sino también para sancionarlas.

Adicionalmente a estos actos de violencia y amedrentamiento, se encuentran a la orden del día los casos de suicidios que se generan en las universidades producto del mismo bullying que reciben los estudiantes por parte de sus pares; así como también los efectos que generan las llamadas "fundas", que han venido a normalizar las acciones discriminatorias que se traducen en hostigamiento sistemático frente a quienes resultan víctimas de esta situación.

La gran mayoría de estas prácticas quedan impunes debido a que actualmente la legislación no considera herramientas y mecanismos para hacer frente a este tipo de situaciones. No se regula de manera específica los hechos de violencia y discriminación cometidos en las instituciones de educación superior, quedando estas sujetas sólo a los reglamentos internos de cada centro educacional, limitándose a los protocolos y procedimientos de cada institución, los cuales en su mayoría carecen de sanciones que permitan combatir la cultura de la violencia y el acoso.

Cabe señalar que la ley Nº 21.091 que establece el nuevo sistema de Educación Superior, señala en su artículo 2º los principios de inclusión, libertad académica, participación y respeto y promoción de los derechos humanos, orientados hacia la valoración de la diversidad y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria. Por su parte, la ley Nº 20.370, General de Educación, establece en su artículo 10º que los estudiantes tienen derecho a estudiar en ambientes tolerantes, donde prime el respeto mutuo y puedan expresar sus opiniones, resguardando sus integridades tanto física como moral, excluyendo los tratos vejatorios o degradantes, así como también los maltratos psicológicos.

En el mismo sentido, la ley Nº 21.094 sobre Universidades Estatales, rescata en su artículo 49 la promoción del diálogo y la tolerancia; así como también establece mediante su artículo 5º los principios que norman el trabajo de las universidades, destacando el pluralismo, la libertad de pensamiento y expresión, la participación, la no discriminación, la equidad de género, el respeto, la tolerancia y la valoración y fomento del mérito.

En línea con lo anterior, y faltando un ordenamiento jurídico común que regule y sancione este tipo de hechos condenables de violencia y discriminación, es que los Senadores Kast, Órdenes, Provoste y García, presentaron una iniciativa de ley (Boletín Nº 14.066-04), que busca generar protocolos a fin de prevenir, evitar y sancionar este tipo de situaciones en las instituciones de educación superior.

El proyecto de los parlamentarios busca establecer una normativa general, a fin de entregar herramientas efectivas para combatir los hechos de violencia y discriminación en las comunidades educativas. Así, este marco normativo busca disponer de una aplicación general y sistemática, evitando situaciones de discriminación arbitraria y violencia política en los establecimientos de educación superior, además de hacerse cargo de la prevención y sanciones de estos mismos hechos.

En consecuencia, el texto busca por objeto prevenir y sancionar aquellos actos de discriminación arbitraria y de violencia acontecidas en instituciones de educación superior. Así, la iniciativa define mediante su 2º artículo la discriminación arbitraria como 'aquella acción u omisión realizada por algún integrante de la comunidad educativa que se enmarque dentro de la definición contemplada en el artículo 2 de

la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, en la que señala toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable’.

De igual modo, el proyecto define la violencia en su artículo 3º como el uso deliberado de fuerza física o psicológica, ya sea en grado de amenaza o efectivo, presencial o virtual, contra una persona, grupo o comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar lesiones o daños psicológicos en razón de la ideología, opinión política y otras.

Así, todo hecho manifiesto y constituido de violencia o discriminación arbitraria constituirá una infracción gravísima.

De igual forma, se busca instaurar un modelo de prevención, en el que se busca contemplar la identificación de las actividades de la institución de educación superior en cuyo contexto se genere o incrementen los riesgos de generación de actuaciones u omisiones violentas o discriminatorias, y el establecimiento de protocolos y procedimientos que permitan a las personas involucradas ejecutar sus actividades de forma tal que se prevenga este tipo de tratos vejatorios. Así mismo, se busca promover la realización de campañas y estrategias comunicacionales que promuevan la difusión de este tipo de protocolos de convivencia en un ambiente de tolerancia y buen trato.

Mediante su artículo 6º el proyecto busca definir un modelo de sanción de los actos de violencia o discriminación arbitraria, garantizando procedimientos de denuncia, investigación de este tipo de actos, estableciendo mecanismos de resguardo de la identidad de la víctima y protectora de la integridad del denunciante y denunciado. Así, se señala que este tipo de modelos deben ser de denuncia ágil y expedita; y que las sanciones internas han de ser proporcionales y asociadas a la gravedad de la comisión de los actos de violencia o discriminación arbitraria, tales como amonestaciones, suspensión de la matrícula, expulsión, suspensión del cargo, destitución o término de la relación laboral, según sea el caso de acuerdo a quienes hayan cometido la falta.

Además, se establecen circunstancias atenuantes, como la inexistencia de otra sanción previa o haber cometido la infracción por motivos de negligencia, sin haber actuado de manera deliberada, o bien, colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos reconocidos como infracción, entre otras. Del mismo

modo, busca instaurar en el mismo artículo, la existencia de circunstancia agravantes, como la reiteración de situaciones de violencia o discriminación arbitraria, haber empleado fuerza física, armas u objetos para producir daños, haber realizado o promovido medidas de disuasión o censura en contra del denunciante y/o afectado, efectuar publicidad del hecho violento o discriminatorio, entre otras.

También, el proyecto contempla el establecimiento de medidas cautelares y de protección; el acceso a la víctima y denunciado al expediente de investigación; la confidencialidad del proceso de denuncia e investigación; así como la duración máxima de seis meses para el procedimiento desde la presentación de la denuncia por parte de la víctima. De igual modo, se busca establecer sanciones a las denuncias falsas relativas a hechos inexistentes o infundados, presentadas sólo con el ánimo deliberado de perjudicar la imagen y reputación del denunciado.

Serán así -según busca el proyecto impulsado- las instituciones de educación superior las encargadas de garantizar el cumplimiento de la normativa propuesta, mediante instancias internas y dotándolas de los recursos necesarios, tanto económico como de personal, para llevarlas a cabo de manera adecuada y en línea con lo planteado.

Cabe señalar que, pese a las sanciones impuestas por los respectivos protocolos y procedimientos que buscan establecerse en cada una de las casas de estudios a través de la presente iniciativa de ley, no obsta que las víctimas puedan interponer acciones legales de acuerdo a la ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación, el Código Penal o cualquier otro cuerpo legal dispuesto en nuestra actual legislación.

Así mismo, se plantea en este texto impulsado por los Senadores, a través del artículo 9º, que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) deberá considerar para los efectos de los criterios y estándares de calidad de la acreditación institucional, que las instituciones de educación superior hayan implementado los modelos de prevención y sanción contra los actos de violencia y discriminación arbitraria, dispuestos en la presente iniciativa de ley.

